

COMISION DE CONSTITUCION

DICTAMEN

Dictámen a los Proyectos sobre Declaraciones Juradas

Señor:

Han venido para dictamen de vuestra Comisión de Constitución las observaciones formuladas por el Presidente de la República al proyecto de ley relativo a declaraciones juradas de bienes y rentas que aprobó el Congreso.

Vuestra Comisión ha tenido en cuenta, parcialmente, las observaciones del Ejecutivo; y ha reelaborado el proyecto de ley con aportes de los señores representantes de los distintos sectores.

El proyecto de ley obliga a todos los funcionarios a que se refiere la Constitución y también a los que aparecen de la ley. No hay excepciones a favor de nadie. Los funcionarios públicos pueden optar por publicar sus declaraciones en el diario oficial. Pero, sea que opten por ello o no opten, todas las declaraciones juradas de bienes y rentas, con carácter de instrumento público, accesible a todo ciudadano, constarán en registro especial que lleve la Contraloría General de la República (o, en su defecto, los propios Registros Públicos, según decida el Pleno del Congreso).

No hacemos análisis de costo-beneficio ni cumplimos otro requisito reglamentario porque, repetimos, este es un proyecto de ley ya aprobado, en lo esencial, por el Pleno del Congreso y por el propio Poder Ejecutivo que sólo lo ha observado en parte.

Transcribimos a continuación la

-

LEY DE DECLARACIONES JURADAS

Artículo 1°.- La presente ley establece la obligación de presentar declaraciones juradas de bienes y rentas y los mecanismos de publicidad respectivos, que alcanzan a los funcionarios y servidores públicos a los que se refiere el artículo 41° de la Constitución; así como a los empleados públicos y aquellas personas que determine la presente ley, independientemente del régimen bajo el cual laboren, contraten o se relacionen con el Estado.

Dicha obligación se debe cumplir al inicio, cada dos años y al concluir la función pública, servicio, labores o encargo. Se extiende a las siguientes personas

1. El Presidente y vice-presidentes de la República, congresistas, ministros de Estado, miembros del Tribunal Constitucional y del Consejo Nacional de la Magistratura, magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público, Defensor del Pueblo, Contralor General y miembros del Jurado Nacional de Elecciones, de la ONPE y el RENIEC.
2. Los oficiales generales de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional en actividad. Dicha obligación se extiende a los oficiales que laboren en unidades operativas a cargo de la lucha contra el tráfico ilícito de drogas. Puede ampliarse, por disposición ministerial, al personal subalterno.
3. Los que desempeñen cargos políticos en las instituciones autónomas del Estado a nivel de secretaría general o directores y, en general, los que desempeñen cargos de confianza.
4. Los titulares de pliegos, organismos, instituciones y proyectos que forman parte del Estado. Dicha obligación se extiende a los encargados o titulares de los sistemas de tesorería, presupuesto, contabilidad, control, logística y abastecimiento de dichas instituciones.
5. Los que representen al Estado ante el directorio de empresas. En los casos de empresas en que el Estado tiene mayoría accionaria, dicha obligación se extiende al gerente general y los encargados o titulares de los sistemas de tesorería, presupuesto, contabilidad, control, logística y abastecimiento de dichas empresas.

La presentación de la declaración jurada a que se refiere la presente ley, es requisito previo e indispensable para el ejercicio del respectivo cargo.

Artículo 2°.- La Declaración Jurada comprende los siguientes bienes ubicados en el territorio nacional o fuera de él:

1. Inmuebles, con especificación del distrito o la circunscripción y la declaración jurada de autovalúo presentada al Municipio correspondiente o, si están en el extranjero, sus equivalentes.
2. Muebles, créditos e ingresos, especificando:

2.1 El valor del menaje de casa si su valor de conjunto supera las 20 UIT.

2.2 El valor del mobiliario de los locales en que el declarante ejerce su profesión, industria o comercio, si supera las 20 UIT. Para determinar dicho monto se toma en cuenta el porcentaje de su participación cuando fuera el caso.

2.3 Dinero, señalándose, cuando menos, la institución bancaria o de otra naturaleza y el número de identificación de la cuenta o libreta del declarante; o de la persona en cuyo poder se encuentra si en conjunto supera las 10 UIT o lo superó en algún momento entre el nombramiento y la declaración. El monto por declarar se determina conforme al saldo del último día del mes anterior a la declaración jurada.

2.4 Vehículos, con indicación de los números de placa de identificación respectivos y de la marca y año de fabricación.

2.5 Acciones, participaciones, certificados de aportaciones u otros documentos similares.

2.6 Títulos-valores.

2.7 El valor de joyas y objetos de arte, si su valor en conjunto excede de 20 UIT.

2.8 Los créditos del declarante, así como derechos de usufructo, uso o habitación.

1. Ingresos provenientes del ejercicio profesional o de actividad empresarial o cualquier otra similar.
2. Todo otro bien que tenga significación patrimonial y que supere las 20 UIT.

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 7° de la presente ley, las declaraciones juradas a que se refiere este artículo se publican en el diario oficial "El Peruano", si la persona obligada se desempeña en una entidad de ámbito nacional. Caso contrario, en el diario de mayor circulación de la región o localidad respectiva.

Artículo 3°.- Adicionalmente a lo establecido en el artículo anterior, las personas obligadas a presentar declaración jurada deben adjuntar a la misma, un anexo no publicable conteniendo la siguiente información:

- 1.- El nombre del cónyuge y la relación de parientes hasta el segundo grado de consanguinidad y de afinidad. En el caso de uniones de hecho, se incluirán también al concubino y los parientes de éste hasta el segundo grado de consanguinidad.

2.- Relación de bienes muebles con un valor unitario igual o superior a una UIT a una UIT.

3.- Toda operación económica realizada desde el año precedente al nombramiento o desde la última declaración, según sea el caso, si supera las 10 UIT.

Dicho anexo, así como la declaración jurada, se registran y archivan, con carácter de instrumento público, en la Contraloría General de la República.

Artículo 4°.- Bajo responsabilidad del titular de cada pliego presupuestal, se publicarán periódicamente en el diario oficial "El Peruano" los ingresos que del Estado perciben por todo concepto en razón de sus cargos, las personas a que hace referencia el artículo 1° de la presente ley.

Se indicará el monto total anual además de especificar cada concepto.

Artículo 5°.- Se consideran ingresos a efectos de lo establecido en el artículo precedente:

Los montos remunerativos permanentes, periódicos, eventuales o diferidos.

1. Las demás cantidades de libre disposición.

Artículo 6°.- Corresponde a la Dirección General de Administración del sector respectivo, o la que haga sus veces, requerir y cautelar la presentación oportuna y adecuada de las declaraciones juradas, y disponer su publicación dentro de los quince días siguientes a su presentación. Asimismo, debe remitir al órgano de Auditoría Interna que corresponda, copia de la declaración jurada que presenten las personas a que hace referencia el artículo 1° de la presente ley y la relación de omisos a la presentación de su declaración jurada.

La información declarada se encuentra sujeta a la presunción de veracidad. Es aplicable en su caso el artículo 411° del Código Penal.

Artículo 7°.- Para proceder a la publicación de la declaración jurada, se debe consultar al declarante. Cuando éste considere que sus derechos a la intimidad o a su seguridad, protegidos por el artículo 2° de la Constitución, pudieran ser afectados, se publicará dicha decisión. Debe en todo caso inscribirse su declaración jurada en el Registro Especial de Declaraciones Juradas que llevará la Contraloría General de la República. Además, se publicará, el número de registro para que cualquier ciudadano pueda acceder a dicha declaración, conforme a los requisitos que establezca el Reglamento.

Artículo 8°.- Tratándose de denuncias formuladas por ciudadanos, el denunciante se hará acreedor, por concepto de estímulo a favor de la moralización pública, al 20% del valor de lo efectivamente recuperado y de la reparación civil que corresponda. El otro 80% revierte a favor del Estado.

De comprobarse la falsedad de la denuncia, la autoridad competente impondrá al denunciante una multa no menor a una (1) UIT vigente al momento de la interposición de la denuncia, sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiere lugar conforme a ley.

Artículo 9°.- El incumplimiento de la presente ley, sin perjuicio de otras responsabilidades, constituye falta grave en cualquiera de los regímenes laborales, tanto para el infractor como para el funcionario o servidor que, estando obligado a ello, no exige su cumplimiento.

Artículo 10°.- Inclúyese un artículo 401-C en el Código Penal, con el siguiente texto:

"Artículo 401-C.- El que, teniendo la obligación legal de presentar declaración jurada de bienes y rentas, y habiendo sido requerido de manera válida y en fecha cierta para que cumpla con dicha obligación, rehusa presentar la respectiva declaración en la forma y la oportunidad previamente

establecidas, será reprimido con treinta a trescientos sesenticinco días multa, e inhabilitación, conforme a los incisos 1) y 2) del Artículo 36° y el Artículo 38° de la presente ley"

Artículo 11°.- Sustitúyase el artículo 401° del Código Penal en los siguientes términos:

"Artículo 401°.- El funcionario o servidor público que, por razón del cargo, se enriquece ilícitamente, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de quince años e inhabilitación de cinco a veinticinco años, conforme al artículo 36° incisos 1, 2 y 8.

Hay enriquecimiento ilícito cuando el aumento del patrimonio del funcionario o servidor público, fuere superior en 50% al que normalmente hubiere podido tener en virtud de los sueldos o emolumentos que haya percibido, de los incrementos de su capital o de sus

ingresos, por cualquier otra causa lícita. Para el efecto se tendrán en cuenta sus declaraciones juradas, y demás pruebas que presente.

Las pruebas presentadas por el procesado para justificar el incremento patrimonial son reservadas y no podrán utilizarse para ningún otro efecto."

DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS

-

PRIMERA.- Inclúyese a los directores de la Comisión de Promoción de la Inversión Privada (COPRI), de los Comités Especiales de Promoción de la Inversión (CEPRIS), así como de la Comisión de Promoción de Concesiones Privadas (PROMCEPRI) y comités especiales que ésta designe, dentro de los alcances del artículo 1º de la presente ley.

Asimismo están comprendidas en esta disposición las personas, funcionarios o no, que reciban atribuciones para ejercer la representación del Estado en la negociación y/o suscripción de contratos que obliguen a la República, dentro o fuera del país.

SEGUNDA.- El Poder Ejecutivo, mediante Decreto Supremo refrendado por el Consejo de Ministros, debe reglamentar la presente ley, en el término de sesenta días útiles contados a partir de la entrada en vigencia de la misma. Dicho reglamento debe contener los procedimientos, responsabilidades y sanciones derivadas del incumplimiento de las obligaciones establecidas por esta ley.

TERCERA.- Dentro de los sesenta días útiles posteriores a la promulgación del Reglamento de la presente ley, y con carácter excepcional, todos los obligados cumplirán con presentar su declaración jurada de bienes y rentas en la forma establecida en la presente norma. En igual plazo, la Dirección General de Administración o la que haga sus veces, de la entidad o sector respectivo, dispondrá la publicación de las declaraciones juradas.

CUARTA.- "Derógase la Ley No. 24801".

Dado y firmado en la sala de la Comisión a los dieciséis días del mes de setiembre de mil novecientos noventa y siete.

